



## SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinticinco de abril de dos mil veintitrés

**23-073**

Proceso:	<b>CONSULTA</b>
Demandante:	<b>DORA LUCÍA MARÍN GIL</b>
Demandados:	<b>COLFONDOS S.A. Y PENSIONES DE ANTIOQUIA</b>
Radicado No.:	<b>05001-31-05-018-2018-00669-01</b>
Decisión:	Se <b>ABSTIENE</b> de conocer en grado jurisdiccional de consulta

En el proceso ordinario laboral de la referencia antes de conocer en el grado jurisdiccional de consulta la sentencia de primera instancia, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

### 1. ANTECEDENTES

Pretendía la parte actora que tras la declaratoria de **INEFICACIA y/o NULIDAD** del traslado a la administradora del RAIS, se tenga como válidamente afiliada al régimen de prima media con prestación definida administrado por PENSIONES DE ANTIOQUIA, sin solución de continuidad, ordenándose a COLFONDOS S.A. trasladar a PENSIONES DE ANTIOQUIA todos y cada uno de los aportes efectuados en el RAIS como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como lo dispone el artículo 1746 del C.C., esto es con los rendimientos que se hubieren causados.

Dentro del trámite de la **AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**, llevada a cabo por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín el día 27 de agosto de 2018, la cual fue reconstruida en audiencia del 27 de febrero de 2023, se **DECLARÓ** la ineficacia del traslado efectuado por la demandante al RAIS, ordenándose a **COLFONDOS S.A.** efectuar el traslado inmediato de todos los valores que hubiera recibido con motivo de su afiliación como cotizaciones, bonos pensionales, los rendimientos que se hubieran causados, sumas adicionales de las aseguradoras y cuotas de administración a la administradora **PENSIONES DE ANTIOQUIA**. Así mismo se **ORDENÓ** a **PENSIONES DE ANTIOQUIA** a reactivar la afiliación del demandante, recibir las sumas indicadas y continuar como su administradora de pensiones. De otro lado se **CONDENÓ** en costas a **COLFONDOS**, fijando las agencias en derecho en la suma de 1 SMLMV a favor de la demandante.

Ninguna de las partes apeló lo resuelto, por lo que el proceso fue remitido ante esta Corporación, para que fuera conocido en virtud del grado jurisdiccional de CONSULTA.

## 2. CONSIDERACIONES

En cuanto al grado jurisdiccional de Consulta, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en su artículo 69, modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, que establece que:

**“...ARTICULO 69. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA.** <Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007. Además de estos recursos existirá un grado de jurisdicción denominado de “consulta”.

Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal si no fueren apeladas.

**También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante.** En este último caso se informará al Ministerio del ramo respectivo y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la remisión del expediente al superior...”. (Negrilla fuera de texto).

Como quedó visto, el grado jurisdiccional de la consulta se instituyó a favor del trabajador, afiliado o beneficiario cuando sus pretensiones resulten adversas por tratarse de los derechos de la parte más débil de la relación laboral o cuando la sentencia sea adversa a la Nación, Departamento o Municipio o aquellas entidades donde la Nación sea garante con el fin de proteger el patrimonio público.

En el caso de autos, la sentencia de primera instancia resultó parcialmente adversa a COLFONDOS, entidad de derecho privado y de PENSIONES DE ANTIOQUIA, dado que dicha entidad tendrá que recibir nuevamente a la demandante como su afiliada y asumir eventualmente las obligaciones pensionales; sin embargo PENSIONES DE ANTIOQUIA, a pesar de ser de derecho público no es una entidad donde la Nación sea garante, pues conforme al Decreto 3780 de 1991, es un establecimiento público de carácter departamental, con autonomía administrativa y financiera, dotado de personería jurídica, razón por la que no se ubica dentro de las entidades a favor de las cuales se deba surtir el grado jurisdiccional de consulta.

Justamente la Corte Constitucional en sentencia C-424 del 8 de julio de 2015, al declarar la exequibilidad del artículo transcrito, preciso que:

“La Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad del principio de consonancia en las sentencias de segunda instancia -artículo 35 de la Ley 712 de 2001- declaró su exequibilidad a través de la sentencia C-968 de 2003, en el entendido que las materias objeto del recurso de apelación incluyen siempre los derechos laborales mínimos irrenunciables del trabajador. Adicionalmente, en dicha oportunidad, este Tribunal se refirió al grado jurisdiccional de consulta en los siguientes términos:

A diferencia de la apelación, la consulta no es un medio de impugnación sino una institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que ésta adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo, lo cual significa que la competencia funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida. (Subraya fuera de texto)

La consulta es un mecanismo *ope legis*, esto es, opera por ministerio de la ley y, por tanto, suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando no se interpone por ésta el recurso de apelación, aunque en materia laboral el estatuto procesal respectivo la hace obligatoria tratándose de entidades públicas. Además, la consulta está consagrada en los estatutos procesales generalmente con base en motivos de interés público con el objeto de proteger a la parte más débil en la relación jurídica que se trate.

La jurisprudencia constitucional ha expresado que la consulta no es un auténtico recurso sino un *grado jurisdiccional* que habilita al superior jerárquico para revisar la legalidad de algunas providencias, por mandato de la ley y sin que medie impugnación por parte del sujeto procesal que se considere agraviado.” (Subraya fuera de texto)

Aunado a lo anterior, en múltiples ocasiones la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre la improcedencia del grado jurisdiccional de consulta en tratándose de sentencia de primera instancia adversas a entidades distintas a los precisos términos del artículo que taxativamente las individualizo, advirtiendo que en esos casos el Tribunal carecía de competencia funcional para proferir un fallo. Entre ellas se destaca la del 10 de febrero de 2009, radicación 31.961 M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza donde adujo que:

En los tres cargos que se presenta, el impugnante le censura al tribunal que asumiera el grado jurisdiccional de consulta, pese a que no se daban los requisitos para ello, dada la naturaleza jurídica de la entidad convocada a pleito. Al discurrir de esa forma, en realidad, y como lo ha explicado la Corte en situaciones análogas a la que convoca ahora su atención, se pretende subsanar irregularidades procesales que debieron corregirse en las instancias, bien por el juzgado de conocimiento interponiendo los recursos pertinentes contra la decisión que ordenó la consulta de la sentencia de primer grado o solicitando al Tribunal que se abstuviera de desatlarla por falta de competencia para ello.

En las condiciones anteriores, este ponente SE ABSTENDRÁ de conocer del proceso y en consecuencia ordenará la devolución del expediente al juzgado de origen para que continúe con el trámite pertinente, toda vez que PENSIONES DE ANTIOQUIA no interpuso el recurso de apelación contra la sentencia que le fue adversa.

**3. DECISIÓN**

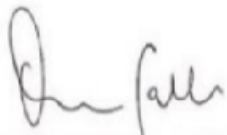
En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el suscrito ponente **RESUELVE:**

**PRIMERO: ABSTENERSE** de conocer el grado jurisdiccional de consulta contra la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín el día 27 de agosto de 2020 la cual fue reconstruida en audiencia del 27 de febrero de 2023, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Déjese copia de lo resuelto en la Secretaria de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo **DEVUÉLVANSE** las diligencias al juzgado de procedencia.

Lo decidido se notifica por **ESTADOS**.

Magistrado,



**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**

CERTIFICO: Que el auto anterior fue notificado por  
ESTADOS No. 069 fijados hoy en la Secretaría de  
este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 26 de ABRIL DE 2023

\_\_\_\_\_  
Secretario.